



NUE 59-A-2019 (AG)

contra Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y dos minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

Descripción del caso:

El 3 de abril del presente año, Jayme Magaña, Oficial de Información de la **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)**, remitió el recurso de apelación interpuesto por [REDACTED] en contra la resolución bajo referencia Res_UAIP-019-2019, emitida y notificada el día 26 de marzo de este año. Asimismo, adjuntó a dicho recurso una copia simple del expediente administrativo relacionado al caso.

De acuerdo a su escrito, [REDACTED] requirió a **CEPA** la información consistente en: "listado de todos los empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), incluyendo para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, si se encuentra contratado por Ley de Salarios o contrato, salario nominal mensual, último grado académico obtenido, género y fecha de ingreso a la institución. Lo anterior para los años 2019, 2018, 2017 y 2016 (un listado para cada año)".

Por su parte, la Oficial de Información en su resolución informó en síntesis, que la Coordinadora del Departamento de Administración de Personal, no proporcionó el nombre completo de los servidores públicos bajo el argumento, que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no lo ordena en el Art. 10; y que los Lineamientos para la Publicación de Información Oficiosa emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (en adelante IAIP o el Instituto) establecen que, "se considerará una buena práctica publicar: los nombres completos (ambos nombres y apellidos) de las personas que ostentan cada uno de los cargos presupuestarios con su remuneración correspondiente". Agregó además que: "las buenas prácticas establecidas no son obligatorias conforme a lo dispuesto por la LAIP [...]".



Ante lo anterior señalado, expone la Oficial de Información, haber hecho de conocimiento de las unidades administrativas correspondientes el criterio resolutorio del IAIP en casos precedentes, a efecto de propiciar la entrega completa de lo solicitado. Asimismo, dicha servidora pública aclaró en uno de los correos electrónicos remitidos al apelante que la información relativa al Puerto de Acajutla si fue suministrada en su totalidad.

Este Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Daniella Huevo Santos** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, sin embargo, en virtud del nombramiento de los nuevos comisionados (propietario y suplente) del sector Asociación Empresariales, el día 16 de mayo del presente año, se reasignó el caso al Comisionado **Andrés Gregori Rodríguez**.

Para este caso, el ente obligado rindió el informe de ley que establece el Art. 88 de la LAIP, en fecha 13 de mayo de 2019, en el cual señaló -en lo medular- que se encuentra justificada la actuación de la Coordinadora del Departamento de Administración de Personal, al establecer las normas por las cuales fundamentó su respuesta, debiendo ser este Instituto el que deberá resolver de conformidad a la LAIP.

El 11 de noviembre del presente año, el comisionado instructor del presente caso, presentó al pleno de este Instituto un informe, señalando que luego de analizar el objeto y la causa de este procedimiento, se determinó que el caso constituye un asunto de mero derecho, es decir, la aplicación de normas y principios de la LAIP, que para resolver su controversia basta con su análisis.

En consecuencia, con base al artículo 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se otorgó un plazo de diez días hábiles al ente obligado para que manifestara si ofrecerían prueba que no conste en el expediente administrativo, o que resultare imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental, con el objetivo de analizar la pertinencia sobre la apertura del procedimiento a prueba. En cuanto al recurrente, no se le requirió que se manifestara al respecto, en virtud que desde su escrito de apelación aclaró su postura, respecto que el presente caso es de mero derecho.

Que habiendo transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, CEPA no realizó ofrecimiento probatorio distinto del que consta en el expediente administrativo, no obstante estar legalmente notificado.

Análisis del caso:

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la naturaleza de la información requerida, específicamente, el tema de entrega de listado de todos empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con la determinación del nombre completo, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Siendo que la negativa que se alega por parte del ente obligado es respecto a este punto en particular.

En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Consideraciones sobre la información pública y sus características frente a la información de carácter oficioso; y, (II) naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito.

I. En el presente caso, se estableció la postura de la Coordinadora del Departamento de Administración de Personal de CEPA, la cual fue respaldada por el titular de su institución, en el sentido de no proporcionar el nombre completo de todos los empleados del ente obligado, argumentando dicha funcionaria que esa información no se encuentra dentro de lo establecido en el art. 10 LAIP, es así que no se encuentra obligada a entregar la misma.

Al respecto es válido sacar a colación, que el art. 6 literal "a" LAIP, otorga un concepto a la determinación de **información pública**, estableciendo que es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, base de datos, comunicaciones y todo tipo de registro que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio.

En tal sentido, el derecho de información pública, permite al ciudadano ejercer una labor de fiscalización y contraloría respecto del actuar de la administración pública, en el entendido que su funcionamiento depende de fondos públicos, lo cual ha sido previamente establecido por este Instituto, en el caso con referencia 103-A-2015 de fecha 11 de agosto de 2015, en el cual se afirmó: "el carácter de derecho fundamental del acceso a la informa

propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

De esa forma, debe entenderse que si se da el caso en que un ciudadano solicite información pública que no se encuentre dentro de la categoría de información pública oficiosa, la misma –en principio- deberá proporcionarse, garantizándose el principio de máxima publicidad.

Lo anterior, da pie a establecer que si bien la información oficiosa, por ley debe estar a disposición del público –aun sin mediar solicitud de información -, la misma no constituye un bloque cerrado de información pública, sino más bien su publicidad promueve la participación ciudadana y puede propiciar una efectiva rendición de cuentas por parte de los entes obligados.

II. Ahora bien, en aplicación al presente procedimiento, es importante mencionar que el listado de todos los empleados de una institución pública con su determinación de nombre completo, si bien no es información pública oficiosa, sí se evidencia un interés público por conocer los nombres de estas personas, pues desempeñan funciones públicas en el ejercicio de sus atribuciones.

Que los nombres y apellidos de un individuo, aunque constituyen un medio para identificarlo como persona, no son datos que afectan a la esfera más íntima de su titular, ni consideradas informaciones personales sensibles como sí lo serían; por ejemplo, las cuestiones referentes al credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, “en tanto investidos de la calidad de funcionarios públicos, no verían afectada su privacidad con la publicación de sus nombres en el contexto de la toma de decisiones propias de su cargo y, por tanto, no se encontrarían protegidos por lo dispuesto en el art. 24 de la LAIP. Entenderlo de otra forma propiciaría el desconocimiento total de la identidad de aquellos funcionarios que toman decisiones de trascendental importancia para el país”¹¹.

Por ende, el nombre de los empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, constituye una numeración de personas que cumplen funciones públicas, en consecuencia, sus nombres y apellidos no constituyen información privada que esté sujeta a secreto o confidencialidad; *contrario sensu*, su entrega favorece la contraloría ciudadana, permitiendo que los funcionarios públicos realicen sus atribuciones conforme a lo establecido en la ley.

Es importante establecer que en reiteradas resoluciones este Instituto ha sostenido el anterior criterio, *inter alias*, en los procesos 41-A-2013 de fecha 29 de noviembre de 2013; 155-A-2014 de fecha 6 de marzo de 2015; 103-A-2015 de fecha 11 de agosto de 2015; 192-A-2015 de fecha 03 de diciembre de 2015; entre otras.

Entonces, en lo particular, se tiene por establecido que a esta fecha, no se ha entregado en su totalidad la información solicitada por el ciudadano [REDACTED] ello con base a las alegaciones hechas por el ente obligado en su informe justificativo; por lo cual, valorándose el interés público y la naturaleza del derecho a la información pública, es pertinente proporcionar a la brevedad posible al apelante, el nombre completo de los empleados públicos de CEPA, junto al resto de información solicitada, pues ello, constituye información pública, y su entrega favorece la contraloría social.

Que no obstante, en dicha alegación se sostiene, que las anteriores categorías de información han sido entregadas previamente al recurrente, se deberá modificar la

¹¹ Sentencia Definitiva de Amparo de la Sala de lo Constitucional, de fecha 25 de julio de 2014, de referencia 155-2013.

información proporcionada, en el sentido de completar con la identificación de nombres y apellidos de todos los empleados, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Por otra parte, en virtud del Principio de Verdad Material, regulado en el Art. 3 Núm. 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, El Pleno de este Instituto, considera pertinente aclarar lo relacionado al requerimiento referido a la categoría del *género* de las personas empleadas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma; de acuerdo a la Real Academia Española, el género es: *“el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”*.

Para este caso concreto, a criterio de este Instituto el apelante ha requerido lo relativo al sexo biológico de las personas empleadas de CEPA, porque requerir el género de una persona, referente a *«los roles socialmente contruidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres»* (Organización Mundial de la Salud, 2019)², se trataría entonces de una construcción social y no de una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos — características anatómico fisiológicas—; y en tal caso, lo procedente sería catalogarlo como un dato sensible, según el Art. 6 lit. “b” de la LAIP, los cuales son estrictamente confidenciales de conformidad con el Art. 24 literales “a” y “c”.

Aclarado lo anterior, sobre qué se entenderá por género, en el caso requerido de las personas empleadas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, de conformidad al principio de máxima publicidad, es decir, la determinación del sexo biológico de las personas servidoras públicas que trabajan en CEPA, la misma, constituye información pública y en esos términos debe ser entregada al apelante.

Por todo lo anterior, es procedente revocar la decisión tomada por el oficial de información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y ordenar al ente obligado proporcione el listado de todos sus empleados públicos, incluyendo para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, si se encuentra contratado por ley de salarios

² tomado el 18 de diciembre de 2019 de: <https://www.who.int/topics/gender/es/>

o contrato, salario nominal mensual, último grado académico obtenido, sexo biológico y fecha de ingreso a la institución; correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (un listado para cada año), en formato procesable.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 94 y 96 letra “d” de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) Revocar la resolución emitida por el oficial de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), de fecha 26 de marzo de dos mil diecinueve.

b) Ordenar a la titular de la **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma**, que para el plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue listado de todos los empleados de dicho ente obligado, incluyendo para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, si se encuentra contratado por ley de salarios o contrato, salario nominal mensual, último grado académico obtenido, sexo biológico y fecha de ingreso a la institución; correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (un listado para cada año), en formato procesable al Ciudadano [REDACTED]


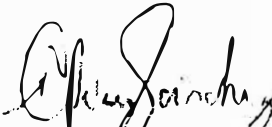
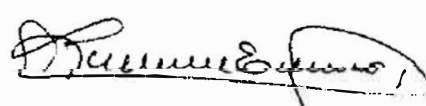

c) Requerir a la titular de la **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma** que en el plazo de veinticuatro horas, luego de fenecido el plazo del literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto, para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) Publíquese, oportunamente

Notifíquese. –


  
PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN.

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinte.



NOTIFICADOR
IAIP

